DECRETOS

Emisión de Títulos de Deuda Pública Externa

DECRETO NUMERO 1109 DE 1989
(mayo 26)

por el cual se ordena una emisión de Títulos de Deuda Pública Externa de la Nación.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 43 de 1987, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 80. de la Ley 43 de 1987 autorizó al Gobierno Nacional para emitir Títulos de Deuda Pública Externa, con cargo al cupo autorizado por el artículo 70. de la misma ley;

Que en desarrollo de la citada Ley, el Gobierno Nacional proyecta efectuar una emisión de Títulos de Deuda Pública Externa hasta por la suma de doscientos millones de dólares (US\$ 200.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social —CONPES— de conformidad con el artículo 80., literal a), de la Ley 43 de 1987 conceptuó favorablemente sobre la proyectada emisión, según consta en el oficio CONPES-066 de marzo 7 de 1989;

Que la Junta Monetaria de conformidad con el artículo 80., literal b), de la Ley 43 de 1987, en sesión del día 22 de febrero de 1989, dio su concepto sobre esta emisión, según consta en el oficio número 090 del 27 de febrero de 1989;

Que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de conformidad con el artículo 80., literal c), de la Ley 43 de 1987, dio concepto sobre la emisión, según oficio fechado el 24 de febrero de 1989,

DECRETA:

Artículo 1o. Ordénase una emisión de Títulos de Deuda Pública Externa de la República de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por un valor

hasta de doscientos millones de dólares (US\$ 200.000.000) de los Estados Unidos de América, con las siguientes características y condiciones financieras y de colocación:

a) Características:

Emisor: La República de Colombia.

Moneda de nominación: Dólares de los Estados Unidos de América.

Monto: Hasta doscientos millones de dólares (US\$ 200.000.000) de los Estados Unidos de América.

Denominación: "Instrumentos Registrados de la República de Colombia" —CRI's—.

Aspecto formal: Los Títulos de Deuda Pública Externa que se expidan o emitan en desarrollo de este Decreto, llevarán las firmas en facsímil del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Tesorero General y del Contralor General de la República de Colombia, de conformidad con el artículo 37, inciso 2o., de la Ley 20 de 1975.

En cumplimiento de la Resolución número 010710 de 1984 de la Contraloría General de la República, el Contralor General de la República autorizará el uso de su facsímil para los títulos, una vez los contratos relativos a la emisión hayan sido refrendados.

Los demás aspectos formales se determinarán en los actos y contratos de que trata el artículo 3o. del presente Decreto.

b) Condiciones financieras:

Plazo: Ocho (8) años, a partir de la emisión.

Período de gracia: Cinco (5) años.

Amortización: Los Títulos de Deuda Pública Externa serán redimidos en su valor nominal en siete (7) instalamentos semestrales y consecutivos contados a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión.

Tasa de interés: Uno y medio por ciento (1 1/2%) anual sobre LIBOR a seis meses, pagadero en cuotas semestrales y vencidas.

c) Condiciones de colocación:

Lugar de colocación: Mercado Financiero Internacional y de los Estados Unidos de América.

Agente de colocación: Chemical Bank.

Artículo 2o. Las demás condiciones y características de la emisión que se autoriza se fijarán en los contratos respectivos de conformidad con los parámetros establecidos por el presente Decreto.

Artículo 3o. El Gobierno Nacional podrá celebrar los actos y contratos que se requieran para la emisión, edición, colocación, garantía y servicio de los títulos de deuda pública externa, dentro de los cuales incluirá a favor de los agentes y/o sus delegatarios, el pago de gastos y comisiones propios de este tipo de operaciones sin exceder en su conjunto el cuatro por ciento (4%) sobre el valor de la emisión.

Artículo 4o. Los contratos que se otorguen en desarrollo del artículo anterior sólo requerirán para su validez y perfeccionamiento, las firmas del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda y Crédito Público y su publicación en el *Diario Oficial*, requisito que se entiende cumplido con la orden de publicación impartida por la Dirección General de Crédito Público.

Artículo 5o. El pago del principal e intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a las operaciones de deuda pública externa que autoriza el presente Decreto, están exentos de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes.

Artículo 6o. Los fondos provenientes de las operaciones de endeudamiento que autoriza y ordena el presente Decreto, se destinarán a financiar planes y programa prioritarios del Gobierno Nacional.

Artículo 7o. El Gobierno Nacional incluirá en sus presupuestos las partidas necesarias para el pago del servicio de la deuda de las operaciones de endeudamiento autorizadas por el presente Decreto.

Artículo 8o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 26 de mayo de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcón Mantilla.

Actividades de las entidades cooperativas

DECRETO NUMERO 1111 DE 1989
(mayo 26)

por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 79 de 1988 y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de las entidades cooperativas.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades consagradas en los numerales 3o. y 14 del artículo 120 y 2o. del artículo 132 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPITULO I

Actividad financiera cooperativa

Artículo 1o. **Actividad financiera cooperativa.** De conformidad con la Ley 79 de 1988, la actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las cooperativas de ahorro y crédito y por los organismos cooperativos de grado superior e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros.

Bajo circunstancias especiales y cuando condiciones sociales y económicas lo justifiquen, el Gobierno Nacional podrá autorizar a las cooperativas multiactivas e integrales la apertura de una sección especializada para el ejercicio de la actividad financiera.

Artículo 2o. **Naturaleza y forma de organización.** Las instituciones financieras cooperativas, en sus diversas modalidades, se organizarán bajo la naturaleza jurídica cooperativa y su constitución se sujetará a las disposiciones generales que rijan para la respectiva modalidad de institución financiera. El Acuerdo Cooperativo y la enumeración de actividades previstos en los estatutos deberán corresponder a una sola modalidad financiera, atendiendo el carácter especializado de este tipo de entidades.

Artículo 3o. **Certificado de autorización.** Las entidades financieras y de seguros del sector cooperativo, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, requerirán para el ejercicio de su actividad del certificado de autorización del Superintendente Bancario. Dicho certificado, tratándose de entidades financieras, no podrá otorgarse por períodos superiores a diez años. En el caso de las entidades de seguros del sector cooperativo este certificado deberá renovarse anualmente, en virtud de solicitud formulada ante el Superintendente Bancario, antes del 15 de noviembre anterior a la fecha de expiración del certificado, que, en todo caso, será el 31 de diciembre del año en que haya sido otorgado.

Artículo 4o. **Régimen financiero de los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero.** Los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero ejercerán la actividad financiera por medio de secciones de ahorros, a través de las cuales realizarán las operaciones permitidas a las Cajas de Ahorro y Secciones de Ahorro de los bancos comerciales, bajo el régimen y las disposiciones propias de éstas, y del régimen cooperativo en lo pertinente.

Sin perjuicio de la existencia de aportes mínimos no reducibles, conforme a la Ley 79 de 1988, en los estatutos deberá establecerse el capital destinado para esta sección, también de carácter mínimo e irreductible.

Artículo 5o. Intermediación financiera. Los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero serán intermediarios financieros entre sus cooperativas afiliadas y entre éstas y el Banco de la República para la canalización de los recursos de descuento.

Artículo 6o. Pasivo para con el público. El total de las obligaciones para con el público de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero, no podrá exceder diez veces el capital mínimo e irreductible y fondo de reserva legal, ambos saneados, de la sección de ahorros.

Artículo 7o. Operaciones de créditos de liquidez. Los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero podrán otorgar créditos o descontar la cartera de crédito concedida por las cooperativas de ahorro y crédito a efectos de cubrir la iliquidez transitoria que éstas puedan presentar, siempre y cuando las garantías que respalden los mencionados créditos sean reales, en todos los casos, y tengan por lo menos un valor comercial de un 130% del total del préstamo.

Artículo 8o. Servicio de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad. Los servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición de la Ley Cooperativa puedan establecer y desarrollar las entidades cooperativas de carácter financiero, autorizadas por la Superintendencia Bancaria, se prestarán directamente o mediante convenios con otras entidades. En todo caso tales servicios no podrán comprometer los depósitos de la sección de ahorros, fondos, reservas y demás recursos captados en la actividad financiera.

Artículo 9o. Operaciones e inversiones admisibles. Los depósitos captados por los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero a través de las secciones de ahorro de que trata el artículo 4o. de este Decreto, sólo podrán destinarse al desarrollo de las siguientes operaciones e inversiones:

- a) En la adquisición o descuento de créditos hipotecarios estipulados mediante el sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).
- b) En inversiones u operaciones de crédito ordinarias o de fomento.
- c) En valores de renta fija emitidos por entidades de derecho público, establecimientos de crédito o sociedades anónimas nacionales.

En general, podrán también desarrollar y efectuar las operaciones permitidas a las Cajas de Ahorro y Secciones de Ahorro de los bancos comerciales.

Los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero no podrán realizar aportes de capital en sus cooperativas socias.

Sin embargo, dichos organismos cooperativos podrán realizar inversiones en cooperativas a las cuales se afilien con fines de representación o para obtener servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que requiera para desarrollar su objeto social, en proporción no mayor a un 50% de la diferencia entre el capital asignado a la Sección de Ahorros y su capital social pagado.

Artículo 10. Vigilancia de la Superintendencia Bancaria. De conformidad con la Ley 79 de 1988 la Superintendencia Bancaria ejercerá el control y la vigilancia integral de la actividad financiera y demás aspectos contables y operativos de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros en los términos del Decreto-ley 1939 de 1986 y demás disposiciones complementarias.

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, sólo corresponderá al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en su función de inspección y vigilancia, velar por la ejecución de actividades cooperativas que no correspondan a la actividad financiera o de seguros de dichos organismos, comunicando a la Superintendencia Bancaria cualquier irregularidad que implique la formulación de glosas que afecten aspectos contables.

Artículo 11. Funciones gubernamentales de registro, certificación y sanción oficial. Con relación a los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros en materia de registro, certificación y sanción oficial corresponde:

1. A la Superintendencia Bancaria:

1.1. Expedir el certificado de autorización para el ejercicio de la actividad financiera, previo al inicio de las operaciones correspondientes.

1.2. Certificar la existencia y representación legal de dichas entidades previo reconocimiento de personería jurídica por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas y llevar el registro del nombramiento de los cuerpos de dirección, vigilancia y revisoría fiscal nombrados por la asamblea, así como el gerente o representante legal de la entidad, los cuales deberán comunicarse al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para que efectúe también la inscripción correspondiente.

1.3. Expedir concepto previo sobre las reformas estatutarias de estas entidades.

2. Al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas:

2.1. Reconocer personería jurídica previo concepto de la Superintendencia Bancaria sobre la viabilidad para obtener el certificado de autorización para el ejercicio de la actividad financiera o de seguros.

2.2. Sancionar la reforma de estatutos previo concepto de la Superintendencia Bancaria.

2.3. Inscribir el nombramiento de cuerpos directivos, de organismos de control y vigilancia y representantes legales de conformidad con las comunicaciones enviadas por la Superintendencia Bancaria.

Artículo 12. Vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito. Corresponderá al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas la inspección y vigilancia exclusiva de las cooperativas de ahorro y crédito. Para ejercer este control el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas contará con las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario con respecto a las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanentes consagradas en la Ley 45 de 1923 y en los Decretos 2216 y 2217 de 1982, 1215 de 1984 y 1939 de 1986 y demás normas complementarias.

Dichas facultades se aplicarán igualmente al caso en que una cooperativa u organismo bajo su control y vigilancia ejerza ilegalmente la actividad financiera o capte recursos del público en forma masiva y habitual sin autorización legal, sin perjuicio de la colaboración de orden técnico que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas pueda solicitar a la Superintendencia Bancaria en estos eventos.

Artículo 13. Prohibición de captar y ejercer actividades financieras. En los términos y para los efectos del Decreto 2920 de 1982 las instituciones cooperativas no contempladas en el presente Decreto como autorizadas para ejercer la actividad financiera, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas, no podrán ejercer dicha actividad ni realizar captaciones del público en forma masiva y habitual.

Artículo 14. Incompatibilidades. Los directivos y administradores de los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, en cuanto funcionarios que son de establecimientos de crédito, estarán sometidos al régimen de incompatibilidades previsto en la ley para las cajas de ahorro y bancos comerciales.

Artículo 15. Préstamos a administradores. En ningún caso las personas con cargo de dirección, administración o vigilancia en las entidades cooperativas podrán obtener para sí o para las entidades que representan, préstamos u

otros beneficios por fuera de las reglamentaciones generales establecidas para el común de los asociados, so pena de incurrir en la pérdida del cargo y sin perjuicio de las otras sanciones a que hubiere lugar.

Los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y las cooperativas de ahorro y crédito, además observarán las limitaciones generales que sobre operaciones activas de crédito dicte el Gobierno Nacional para las instituciones financieras.

CAPITULO II

Actividad aseguradora

Artículo 16. Actividad cooperativa de seguros. La actividad cooperativa de seguros se ejercerá en forma especializada por medio de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo especializadas en seguros, los cuales sólo podrán desarrollar su actividad frente a sus asociados y la comunidad vinculada a ellos.

Artículo 17. Patrimonio técnico. Los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de seguros que desarrollen su actividad exclusivamente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos, deberán contar con el patrimonio técnico que determine el Superintendente Bancario, según los ramos que exploten.

Cuando dichas entidades cuenten con autorización para extender sus servicios al público en general, su patrimonio técnico deberá ajustarse al establecido para las compañías de seguros.

Artículo 18. Prestación de servicios al público. Las entidades cooperativas de seguros podrán solicitar a la Superintendencia Bancaria autorización para extender la prestación de sus servicios al público en general. Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 20. de la Ley 105 de 1927 y el Superintendente podrá emitir o rechazar la solicitud en vista del concepto que se forme sobre la conveniencia para el público de esta autorización.

Artículo 19. Régimen de inversiones forzosas de las cooperativas de seguros. En concordancia con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 79 de 1988, las entidades cooperativas de seguros deberán invertir y mantener sus reservas técnicas en los títulos, las cuantías, la oportunidad y los términos establecidos en las disposiciones vigentes para las compañías de seguros.

Artículo 20. Régimen de inversiones voluntarias. En materia de inversiones admisibles, las entidades cooperativas de seguros deberán ceñirse a las normas que sobre la materia les son aplicables a las compañías de seguros, cuando éstas cuenten con autorización para extender sus servicios al público en general.

Las inversiones admisibles de las entidades cooperativas de seguros cuya actividad se desarrolle en interés de sus propios asociados y de las entidades cooperativas, se podrán realizar en los siguientes rubros:

a) En certificados de depósito de ahorro a término emitidos por los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y por las cooperativas de ahorro y crédito de carácter financiero. Esta inversión no podrá exceder del 40% del capital pagado y de las reservas patrimoniales de la entidad inversionista.

b) En préstamos otorgados a entidades pertenecientes al sector cooperativo, que se encuentren legalmente constituidas. Estos préstamos no podrán exceder del 10% del capital pagado y de las reservas patrimoniales para un solo deudor. Sin embargo, cuando el exceso de la obligación estuviere amparado con garantía real, el préstamo podrá hacerse hasta por un 25% de los citados capital pagado y reservas patrimoniales, siempre que los bienes afectados a las garantías reales tengan un valor comercial superior, al menos en un 20%, del monto garantizado.

c) En rubros diferentes a los enunciados previa autorización expedida por el Superintendente Bancario.

Artículo 21. Administración y vigilancia. No podrán pertenecer a los consejos de administración, a las juntas de vigilancia o a los comités especiales de una entidad cooperativa de seguros, las personas que ejerzan cargos de representación legal o administración en otra u otras entidades cooperativas de seguros o en instituciones del sector asegurador sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 22. Intermediarios. Las entidades cooperativas de seguros no estarán sometidas a la intermediación de agencias, agentes o corredores de seguros. No obstante, podrán colocar pólizas de seguros con el concurso de intermediarios debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria, siempre que exista la correspondiente previsión estatutaria en tal sentido.

CAPITULO III

Disposiciones finales

Artículo 23. Homonimia. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas se abstendrá de autorizar el funcionamiento de cooperativas con razón social igual o semejante a la de un organismo cooperativo de grado superior e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero y de seguros, evitando en todo caso la existencia de homonimia.

Artículo 24. Régimen legal aplicable. Los organismos cooperativos de grado superior e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, en el ejercicio de la actividad financiera, quedarán sometidos, en lo no previsto en este Decreto, a las disposiciones generales que regulan tal actividad.

Artículo 25. Tránsito de legislación. Las entidades a que se refiere este Decreto dispondrán de seis meses a partir de la fecha de iniciación de su vigencia para adecuarse a la situación prevista en el artículo 4o.

Artículo 26. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga los Decretos 1659 de 1985, 1658 de 1986, 1876 de 1987 y las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E. a 26 de mayo de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Luis Fernando Alarcón Mantilla

El Jefe de Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas,

Barlahan Henao Hoyos.

Actividad de ahorro y crédito de las entidades cooperativas

DECRETO NUMERO 1134 DE 1989
(mayo 30)

por el cual se reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de éstas.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las consagradas en los numerales 3o. y 14 del artículo 120 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1o. Disposición general sobre el servicio de ahorro y crédito de las cooperativas. Por regla general, las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Secciones de Ahorro y Crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales, podrán recibir y mantener ahorros en depósitos sólo por cuenta de sus asociados entre quienes, igualmente, quedará circunscrito el otorgamiento de préstamos.

Artículo 2o. Actividad financiera de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito. De conformidad con el artículo 99 de la Ley 79 de 1988, las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito podrán ejercer la actividad

financiera de captar ahorros en depósitos de terceros y otorgarles préstamos a éstos si así lo consagran expresamente sus estatutos, cumplen los requisitos establecidos en este Decreto y reciben autorización previa del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para desempeñar la citada actividad financiera.

Artículo 30. Actividad financiera de las Cooperativas Multiactivas e Integrales. Las Cooperativas Multiactivas e Integrales podrán tener Sección Especializada para el ejercicio de la actividad financiera con terceros no socios, bajo las circunstancias especiales detalladas a continuación:

1. Inexistencia de servicios de ahorro y crédito por parte de Cooperativas Especializadas dentro del área geográfica atendida por la Cooperativa Multiactiva o Integral.
2. Estudio socio-económico que demuestre la viabilidad de la Sección Especializada para el ejercicio de la actividad financiera con el simultáneo funcionamiento de los demás servicios atendidos por la correspondiente Cooperativa Multiactiva o Integral, su desarrollo empresarial y los planes y programas de proyección comunitaria.
3. Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 40. del presente Decreto por parte de la Cooperativa Multiactiva o Integral.

Parágrafo. El Gobierno Nacional analizará en cada caso si las particulares condiciones sociales y económicas justifican el ejercicio de la actividad financiera con terceros no socios, y mediante providencia particular, se autorizará la correspondiente actividad financiera de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Artículo 40. Requisitos para el ejercicio de la actividad financiera. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito para poder recibir y mantener depósitos de ahorros de terceros y de otorgar créditos a éstos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Demostrar ante el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas experiencia no menor de tres (3) años en el manejo del ahorro y crédito con sus asociados, en una actividad normal y ajustada a las pautas legales y estatutarias.
2. Consagrar en el estatuto y tener efectivamente pagado un aporte social mínimo e irreducible no inferior a quinientas (500) veces el salario mínimo legal mensual vigente en municipios hasta de veinticinco mil (25.000) habitantes, de mil (1.000) veces en municipios hasta de cincuenta mil (50.000) habitantes, de dos mil (2.000) veces en municipios hasta de cien mil (100.000) habitantes y de cuatro mil (4.000) veces en los demás casos.
3. Contar con los reglamentos especiales, aprobados por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, sobre organización y funcionamiento del servicio de crédito y captación de recursos provenientes del ahorro.

4. Tener en ejecución manuales de procedimiento y operación del servicio de ahorro y crédito.

5. Establecer el Fondo de Liquidez previsto en el artículo 12 del presente Decreto.

Artículo 50. Resolución de autorización para el ejercicio de la actividad financiera. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas expedirá, mediante resolución especial e individual, la autorización para el ejercicio de la actividad financiera a las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior y que tramiten la solicitud respectiva por escrito ante el Jefe del Departamento, quien la otorgará previas las verificaciones del caso y por un período no superior a diez años.

Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Multiactivas o Integrales que presten el servicio de ahorro y crédito exclusivamente a sus asociados, no serán consideradas como cooperativas con actividad financiera y en consecuencia no requieren de la autorización de que trata el presente artículo.

Parágrafo. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito que, en razón de disposiciones legales anteriores, se encuentren ejerciendo la actividad financiera, y deseen continuar con ella, deberán obtener la certificación de autorización para el ejercicio de la misma, para lo cual cumplirán con todos los requisitos establecidos en el artículo 40. de este Decreto y presentarán la solicitud en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto.

Artículo 60. Operaciones permitidas. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Secciones de Ahorro y Crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales, sólo podrán captar de sus asociados depósitos de ahorro en las siguientes modalidades:

1. A la vista, mediante el sistema de libretas o documento idóneo que refleje fielmente el movimiento de la cuenta.
2. A término, sólo mediante la expedición de Certificados de Depósitos de Ahorro a Término —CDAT—.
3. En forma contractual de acuerdo con los programas que establezcan el estatuto o reglamento respectivo de la Cooperativa.

Las Cooperativas Especializadas o las Secciones de Ahorro y Crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales, autorizadas para ejercer actividad financiera con terceros, sólo podrán recibir de éstos, depósitos de ahorro a la vista y a término mediante la expedición de Certificados de Depósitos de Ahorro a Término —CDAT—.

Artículo 70. Secciones de ahorro y crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales. Para que una Cooperativa Multiactiva o Integral pueda prestar el servicio de

Ahorro y Crédito a sus asociados deberá estar prevista tal actividad en sus estatutos y establecer una sección especializada con reglamentos, procedimientos y manejos contables independientes, sin perjuicio de la consolidación de cuentas de operaciones generales de la Cooperativa y de otras secciones de ésta.

El reglamento general de la Sección de Ahorro y Crédito deberá establecer la porción del aporte social mínimo estatutario que estará asignado al servicio de ahorro y crédito. En el evento de las Cooperativas Multiactivas o Integrales autorizadas por el Gobierno Nacional para extender sus servicios a terceros el referido aporte social debe estipularse estatutariamente, sin perjuicio de los aportes mínimos no reducibles establecidos en la Ley 79 de 1988.

Artículo 8o. Envío al Dancoop de reglamentos de servicios de ahorro y crédito. Para efectos de inspección y vigilancia las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito que limiten este servicio a sus asociados, y las Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito para servicio exclusivo de sus asociados, deberán remitir al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación por parte del órgano competente de la Cooperativa, el reglamento de creación y funcionamiento del servicio o Sección de Ahorro y Crédito, así como sus posteriores modificaciones.

Parágrafo. Las citadas entidades que se encuentren prestando el servicio de ahorro y crédito a sus asociados, deberán enviar el reglamento pertinente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la vigencia del presente Decreto.

Artículo 9o. Relación pasivo-aportes-reservas. El total de las obligaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito para con el público, incluyendo los depósitos de ahorros de sus asociados y de terceros, no podrá exceder más de diez (10) veces en relación con el monto mínimo de aportes sociales no reducibles y su reserva para protección de aportes.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en casos excepcionales autorizará el cómputo de los auxilios y donaciones de carácter patrimonial como base de esta relación.

Para el evento de las Cooperativas Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito que estén autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera, dicha proporción se mantendrá, pero en este caso la relación de aportes será la que corresponda al monto de las aportaciones sociales mínimas y reserva de protección de aportes asignada a la correspondiente sección.

En ambas circunstancias la captación de ahorros de terceros por parte de estas entidades, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del total del endeudamiento.

Parágrafo. Las entidades cooperativas a que hace referencia el presente artículo y cuyas relaciones de endeudamiento superen los porcentajes aquí establecidos a la fecha de vigencia del presente Decreto, deberán informarlo al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de tal vigencia, con la programación de la respectiva entidad sobre la forma y plazos en que se ajustará a la relación de endeudamiento establecida y que en ningún caso podrá exceder del término de dos (2) años.

Artículo 10. Relación de endeudamiento de Cooperativas sin actividad financiera. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Secciones de Ahorro y Crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales que no ejerzan actividad financiera con terceros, deberán también limitar su relación de endeudamiento en los porcentajes generales establecidos en el artículo anterior.

Artículo 11. Vinculación de terceros ahorradores como asociados. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito con actividad financiera promoverán la vinculación de los terceros ahorradores, como asociados de la Cooperativa, según las disposiciones estatutarias pertinentes, y en este sentido efectuarán campañas para su afiliación de las cuales informarán cada seis (6) meses al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 12. Fondos de liquidez y créditos de emergencia. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito mantendrán en un organismo cooperativo de segundo grado o instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria, un depósito equivalente al diez por ciento (10%) del total de sus captaciones de ahorro a la vista y a término, como fondo de liquidez permanente.

El incumplimiento a la obligación de mantener el Fondo de Liquidez en el porcentaje señalado determinará la imposición de multas por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas previstas en el artículo 154 de la Ley 79 de 1988 que adicionó el artículo 46 de la Ley 24 de 1981.

Artículo 13. Servicios de previsión, asistencia y solidaridad. Los servicios de asistencia, previsión y solidaridad que las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito puedan establecer y desarrollar conforme a los objetivos previstos en los estatutos, se prestarán por sí o mediante convenios con otras entidades, pero en todo caso no podrán comprometer para estos fines los depósitos de ahorros, reservas y demás recursos del servicio de ahorro y crédito y en consecuencia deberán constituirse fondos especiales para estos efectos o destinarse, en lo permisible, el Fondo de Educación y Solidaridad.

Artículo 14. Prohibición de inversión de recursos de ahorros. Las Cooperativas previstas en este Decreto no podrán invertir los depósitos de ahorros captados de aso-

ciados o de terceros en inversiones de riesgo y deberán limitarse a colocarlos en operaciones de crédito que consisten en títulos valores otorgados por los prestatarios con las adecuadas garantías, o en títulos negociables emitidos por entidades financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Bancaria, preferentemente del sector Cooperativo. Igualmente podrán hacer inversiones en títulos de deuda pública o emitidos por el Banco de la República.

Las inversiones en activos fijos, cuando comprometan los recursos de ahorros de asociados o de terceros, deberán ser autorizadas previamente por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Artículo 15. Prohibición otorgamiento de crédito por fuera del reglamento. Los préstamos que se otorguen con cargo a recursos captados de depósitos de ahorros, deberán ceñirse a los respectivos reglamentos vigentes al efecto.

En ningún caso las personas con cargo de dirección, administración o vigilancia en la Cooperativa podrán obtener para sí o para las entidades que representan, préstamos u otros beneficios similares por fuera de los establecidos para el común de los asociados, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. Además, estas instituciones observarán las limitaciones generales que sobre operaciones activas de crédito dicte el Gobierno Nacional para las entidades financieras sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 16. Vigilancia exclusiva del Dancoop. Corresponderá al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en forma exclusiva, la inspección y vigilancia de las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y de las operaciones de ahorro y crédito que realicen las Cooperativas Multiactivas o Integrales. Para el ejercicio de tales funciones el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas tendrá las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario con respecto a las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente, consagradas en la Ley 45 de 1923, en los Decretos 2216 y 2217 de 1982, 1215 y 2906 de 1984, 1939 de 1986 y en las normas concordantes.

Artículo 17. Colaboración de orden técnico de la Superintendencia bancaria. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá solicitar colaboración de orden técnico a la Superintendencia Bancaria, para el ejercicio de la inspección y vigilancia de la actividad financiera de las cooperativas previstas en el presente Decreto.

Artículo 18. Informe del Revisor Fiscal. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia gubernamental contemplada en los artículos anteriores, los Revisores Fiscales de las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y de las Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito deberán presentar cada tres (3) meses al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas un informe certificado sobre los siguientes aspectos:

1. Si la entidad ha mantenido constantemente los depósitos de liquidez sobre los recursos captados de ahorro en el porcentaje establecido por este Decreto.
2. Si la entidad se ajustó permanentemente a las relaciones de endeudamiento establecidas en el presente Decreto y durante el término materia del informe.
3. Si los préstamos otorgados constan en títulos valores debidamente diligenciados y con las correspondientes garantías.
4. Si la cartera del servicio de ahorro y crédito está debidamente clasificada, si sobre ella se vienen efectuando las provisiones que la amparan y si éstas cubren la totalidad de las obligaciones de dudoso recaudo.
5. Si la entidad se ajustó al régimen de inversión señalado en este Decreto en relación con los recursos de captación de ahorros y si los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos.
6. Si la administración del servicio de ahorro y crédito se ha desarrollado en forma normal y sin alteraciones que hayan ocasionado pérdida de confianza en los ahorradores, o corridas imprevistas de depósitos de ahorros.
7. Si la Revisoría Fiscal cuenta con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito.

Artículo 19. Tasas activas y pasivas. En materia de tasas de interés de las operaciones activas y pasivas de las Cooperativas de ahorro y crédito y Secciones de Ahorro y Crédito de las Cooperativas Multiactivas o Integrales, éstas se sujetarán a las establecidas para las Cajas de Ahorros e Instituciones Financieras del sector cooperativo vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

Artículo 20. Vigencia y derogación de normas. El presente Decreto rige a partir del 4 de julio de 1989 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Decretos 2263 de 1984, 1659 de 1985 y 1658 de 1986.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 30 de mayo de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcón Mantilla

El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Barlahan Henao Hoyos.

Régimen sobre pensiones

DECRETO NUMERO 1160 DE 1989
(junio 2)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de la facultad conferida en el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Política y en la Ley 71 de 1988,

DECRETA:

CAPITULO I

Normas generales sobre pensiones

Artículo 1o. Reajuste pensional. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, incapacidad permanente parcial, compartidas y de sobrevivientes, de los sectores público, privado y del Instituto de Seguros Sociales, se reajustarán de oficio y en forma simultánea con el salario mínimo legal, en el mismo porcentaje en que éste sea incrementado por el Gobierno Nacional.

Parágrafo. El reajuste de las pensiones compartidas lo efectuarán el Instituto de Seguros Sociales y el patrono obligado, sobre el valor de la parte de la pensión que a cada uno le corresponda cubrir.

Artículo 2o. Beneficiarios del reajuste. Tendrán derecho al reajuste de las pensiones de que trata el artículo anterior, aquellas personas cuyo derecho se haya causado y estén retiradas del servicio o desafiliadas del régimen de los seguros sociales obligatorios en los riesgos de invalidez, vejez y muerte y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Artículo 3o. Pensión mínima y máxima. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.

Artículo 4o. Causación del derecho. Se entiende causado el derecho a una pensión, cuando se reúnan los requisitos señalados para cada caso, en la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales.

Artículo 5o. Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los siguientes casos:

a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez;

b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del sector público después de haber completado el tiempo de servicios requerido por la ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.

Artículo 6o. Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional:

1o. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, al compañero o a la compañera permanente del causante.

Se entiende que falta el cónyuge:

a) Por muerte real o presunta;

b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;

c) Por divorcio del matrimonio civil.

2o. A los hijos menores de 18 años, inválidos de cualquier edad y estudiantes de 18 años o más de edad, que dependan económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez o estudios.

3o. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales y adoptantes del causante, que dependan económicamente de éste.

4o. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos y padres con derecho, a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante y hasta cuando cese la invalidez.

Parágrafo. Los órdenes de sustitución consagrados en el presente artículo, se aplicarán a la pensión especial establecida en el artículo 1o. de la Ley 126 de 1985 en favor de los beneficiarios de los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, conforme al artículo 4o. de la Ley 71 de 1988.

Artículo 7o. Pérdida del derecho del cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho éste que se demostrará con prueba sumaria.

El cónyuge sobreviviente pierde el derecho de la sustitución pensional que esté disfrutando, cuando contraiga nupcias o haga vida marital.

Artículo 8o. Distribución entre beneficiarios de la sustitución pensional. La sustitución pensional se distribuirá entre los beneficiarios así:

1o. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente del causante y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido por partes iguales.

2o. A falta de hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión, al cónyuge sobreviviente o al compañero o compañera permanente del causante.

3o. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá a los hijos con derecho, por partes iguales.

4o. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión a los padres con derecho.

5o. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, hijos o padres con derecho, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos del causante.

Parágrafo. Cuando falte alguno de los beneficiarios del respectivo orden por extinción o pérdida del derecho, la parte de su pensión acrecerá a la de los demás, en forma proporcional.

Artículo 9o. Efectividad y pago de la pensión. Las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez reconocidas, se harán efectivas y deberán pagarse mensualmente desde la fecha en que el empleado o trabajador en forma definitiva se retire del servicio o se desafilie de los seguros de invalidez, vejez, muerte y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Para el efecto, la respectiva entidad pagadora comunicará al empleador la fecha a partir de la cual se incluirá en nómina al pensionado para que proceda a su retiro del servicio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades pagadoras de las pensiones establecerán los procedimientos internos y los mecanismos necesarios para que la recepción de los documentos se realice en las dependencias que tengan establecidas en el lugar de residencia del pensionado o en el sitio más cercano a ella. El pago de las mensualidades pensionales se efectuará en el lugar indicado por el interesado cuando la entidad pagadora cuente con servicios propios o contratados para tal fin.

Artículo 10. Reliquidación de la pensión de jubilación. Los empleados oficiales a quienes se les hubiere reconocido el derecho a la pensión de jubilación y no se hayan retirado del servicio, una vez producido éste, se les reliquidará dicha prestación, tomando como base el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

Parágrafo. La reliquidación de la pensión de que trata el presente artículo, no tendrá efectos retroactivos sobre las mesadas anteriores al retiro del trabajador o empleado del sector público en todos sus niveles, cuando a éstas hubiere lugar.

Artículo 11. Derechos de los beneficiarios de la sustitución pensional. Al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos de cualquier edad o estudiantes de 18 o más años de edad, a los padres o a los hermanos inválidos, con derecho a la sustitución pensional, se les harán los reajustes pensionales proporcionales a que haya lugar y tendrán los beneficios y las obligaciones establecidas en las leyes, convenciones colectivas y demás disposiciones, consagradas a favor de los pensionados.

Artículo 12. Compañero permanente. Para efectos de la sustitución pensional, se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente a quien ostente el estado civil de soltero(a) y haya hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en regímenes especiales.

Parágrafo. El compañero o compañera permanente pierde el derecho a la sustitución pensional que esté disfrutando cuando contraiga nupcias o haga vida marital.

Artículo 13. Prueba de la calidad de compañero permanente. Se acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar.

En caso de vínculo matrimonial del compañero o compañera permanente que reclame el derecho a la sustitución pensional, se deberá presentar la respectiva sentencia judicial sobre la nulidad o el divorcio, debidamente ejecutoriada.

Artículo 14. Prueba del estado civil y parentesco. El estado civil y parentesco del beneficiario de la sustitución pensional, se comprobará con los respectivos registros notariales o en su defecto con las partidas eclesiásticas y demás pruebas supletorias.

Artículo 15. Estado de invalidez. El estado de invalidez se determinará de acuerdo con la ley o los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y se calificará por el servicio médico laboral o de salud ocupacional de la entidad de previsión o patronal a la cual corresponda el reconocimiento de la pensión, o en su defecto, por el servicio médico que la respectiva entidad hubiere designado.

Artículo 16. Condición de estudiante. Los hijos estudiantes de 18 o más años de edad, deberán acreditar la calidad de tales, mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento docente reconocido por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios. El cambio de carrera o profesión por razones distintas de salud, hará perder el derecho a la sustitución pensional.

Artículo 17. Dependencia económica. Para efecto de la sustitución pensional se entiende que una persona es

dependiente económicamente, cuando no tenga ingresos o medios necesarios para su subsistencia. Este hecho se acreditará con declaración juramentada que al respecto rinda el interesado ante la entidad que deba reconocer y pagar la sustitución pensional o con los demás medios probatorios establecidos en la ley. La dependencia económica del menor de edad se presume salvo que se demuestre lo contrario.

Artículo 18. Descuentos a favor de las asociaciones de pensionados. Para efectos de los descuentos a favor de la respectiva agremiación de pensionados de que trata el artículo 5o. de la Ley 71 de 1988, las asociaciones de pensionados deberán acreditar ante las empresas, entidades o patronos, que satisfacen pensiones, la vigencia de su personería jurídica y la representación legal, mediante certificado expedido por autoridad competente. Así mismo acompañarán la autorización expresa y escrita del pensionado, presentada personalmente ante la entidad pagadora o en su defecto, ante notario o autoridad política o judicial del lugar de residencia del pensionado.

CAPITULO II

Pensión de jubilación por aportes

Artículo 19. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión a cualquiera de las cajas de previsión, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial o distrital y al Instituto de Seguros Sociales.

Artículo 20. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988 se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón y 55 años o más de edad si es mujer, acrediten 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las demás entidades de previsión y gozarán de ella quienes se hubieren retirado del servicio o desafiliado de los seguros de invalidez, vejez y muerte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

No tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes:

- a) Las personas que al 19 de diciembre de 1988 hubiesen cumplido 50 años de edad si se es varón y 45 años de edad si se es mujer y tengan 10 años o más de cotizaciones en una o varias de las entidades de previsión;
- b) Las personas que en cualquier época acrediten 20 años o más de servicios continuos o discontinuos en entidades oficiales del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital;
- c) Las personas que en cualquier época acrediten 1.000 o más semanas de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales;

d) Las personas que hubieren adquirido el derecho o estén disfrutando pensión de jubilación o de vejez.

Artículo 21. Tiempos de servicio no computables como aportes. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al Sistema de Seguridad Social que los protege.

Artículo 22. Salario asegurado. Se tendrá como salario asegurado, en cada entidad empleadora el promedio mensual aritmético de lo devengado por el empleado durante el último año, o por el tiempo trabajado si es inferior a dicho período, teniendo en cuenta únicamente los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

Si la entidad de previsión es el Instituto de Seguros Sociales, el salario asegurado será el promedio de los salarios de base de las categorías sobre las cuales se efectuaron los aportes durante el último año de servicios.

Parágrafo. El salario asegurado se expresará en número de salarios mínimos legales mensuales más altos vigente en el momento del retiro de la entidad empleadora, dividiendo el valor del salario asegurado obtenido, por dicho salario mínimo.

Artículo 23. Certificaciones y tramitación. La entidad empleadora al retiro del trabajador o cuando éste lo solicite, certificará por escrito: el tiempo trabajado, la entidad de previsión a la cual fueron hechos los aportes y el valor pagado por cada uno de los factores salariales durante el último año de servicios. Si el período de trabajo fuere inferior a un año, deberá certificar lo pagado por los citados conceptos, durante dicho período.

La dependencia de personal de la última entidad empleadora tendrá la obligación de recibir, revisar y completar los documentos pertinentes para demostrar el derecho a la pensión de jubilación por aportes. Así mismo, deberá tramitarlos ante la entidad de previsión obligada al pago de la pensión, la cual dispondrá de noventa (90) días para resolver, contados a partir de la radicación de la documentación.

Artículo 24. Base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. La base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes se obtendrá de la siguiente forma:

- a) Si todos los aportes corresponden a períodos anteriores al 19 de diciembre de 1988, la base para la liquidación de la pensión será el último salario asegurado;

b) Si se acreditan tiempos de aportes posteriores al 19 de diciembre de 1988, la base para la liquidación de la pensión será la suma de los productos de cada tiempo de aportación posterior a esa fecha por el salario asegurado en la entidad empleadora respectiva, dividida por la suma de dichos tiempos, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Base para la liquidación de la pensión =

$$\frac{S1 t1 + S2 t2 + S3 t3 + \dots + Sn tn}{t1 + t2 + t3 + \dots + tn}$$

Donde:

- n = Número de entidades empleadoras donde trabajó tiempo continuo
- S1 = Salario asegurado por entidad empleadora 1
- S2 = Salario asegurado por entidad empleadora 2
- ...
- ...
- ...
- Sn = Salario asegurado por entidad empleadora n
- t1 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 1
- t2 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 2
- ...
- ...
- ...
- tn = Tiempo trabajado en la entidad empleadora n

Los salarios asegurados empleados en estos cálculos deberán estar expresados en salarios mínimos.

Artículo 25. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la primera mesada de la pensión de jubilación por aportes, expresada en número de salarios mínimos mensuales, será igual al 45% de la base de liquidación, más el 3% de la misma base por cada año de aportes efectuados con posterioridad al 19 de diciembre de 1988, sin que el monto total sobrepase el 75% de dicha base. El valor mínimo de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 15 veces dicho salario.

La pensión de jubilación por aportes será reajustada de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual.

Artículo 26. Derechos de los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes. Los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes tienen los mismos derechos que los pensionados por jubilación del sector público y sus obligaciones son las establecidas en los respectivos reglamentos de la entidad de previsión pagadora.

Artículo 27. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se le efectuaron apor-

tes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ella haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.

Los pagos periódicos podrán hacerse a través de entidades financieras reconocidas por el Estado, mediante los mecanismos que establezca la respectiva entidad de previsión, por iniciativa propia o del pensionado interesado.

Artículo 28. Cuotas-partes. Todas las entidades de previsión a las que un trabajador efectuó aportes que fueron utilizados para la liquidación de su pensión de jubilación por aportes, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota-parte correspondiente.

Para el efecto de las cuotas-partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación para reconocimiento de la pensión a los organismos deudores quienes dispondrán del término de 15 días hábiles para objetarlo, vencido el cual, se entenderá aceptado por ellos y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.

Cada cuota-parte se calculará así:

a) Si todos los aportes utilizados corresponden a períodos anteriores al 19 de diciembre de 1988, la cuota-parte a cargo de cada entidad de previsión será la proporción del valor de la pensión, igual al tiempo aportado a esta entidad dividido por el tiempo total de aportación;

b) En caso de existir tiempos de aportación posteriores al 19 de diciembre de 1988, cada entidad de previsión tendrá a su cargo una cuota-parte por entidad empleadora de la cual haya recibido aportes y por cada tiempo de aportación continuo de la misma. El valor, expresado en salarios mínimos, se calculará con un factor que se aplica al valor de la pensión y que es igual al producto del tiempo de aportación continuo por el salario asegurado, dividido por la suma de los productos de cada uno de los tiempos de aportación por el salario asegurado respectivo por cada entidad empleadora, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Factor de cuota-parte por la entidad empleadora i y por el tiempo de aportación continuo i =

$$\frac{ti Si}{t1 S1 + t2 S2 + \dots + tn Sn}$$

Donde:

- n = Número de entidades empleadoras donde trabajó tiempo continuo

S1 = Salario asegurado por entidad empleadora 1
 S2 = Salario asegurado por entidad empleadora 2
 ...
 ...
 ...
 Sn = Salario asegurado por entidad empleadora n
 t1 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 1
 t2 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 2
 ...
 ...
 ...
 tn = Tiempo trabajado en la entidad empleadora n

Artículo 29. **Sistema de financiación.** A partir de la vigencia de este Decreto y en un término de tres años las entidades de previsión definirán, mediante un estudio actuarial, el sistema de financiación de las cuotas-partes a su cargo por concepto de la pensión de jubilación por aportes. El sistema al menos deberá prever el reparto simple más las reservas que cubran el valor de la obligación por un período de seis (6) meses.

El comportamiento del sistema de financiación escogido, deberá revisarse actuarialmente mínimo una vez por año, comparando el valor nominal con el monto real de las reservas.

El valor de los aportes que exija el sistema de financiación escogido, podrá ser repartido a criterio de la entidad de previsión, entre los trabajadores, los empleadores y las instituciones gubernamentales correspondientes.

El sistema de financiación podrá ser modificado por la entidad de previsión de acuerdo a la variación que presente la situación económica de la región donde opere, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la reserva mínima exigida.

Artículo 30. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
 Dado en Bogotá, D.E. a 2 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
 María Teresa Forero de Saade.

Comercio exterior de productos agropecuarios

DECRETO NUMERO 1226 DE 1989
 (junio 13)

por el cual se reglamenta el parágrafo 2o. del artículo 3o. de la Ley 48 de 1983, tendiente a regular aspectos del Comercio Exterior de Productos Agropecuarios.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 22 del artículo 120 de la Constitución Política y con sujeción a las pautas previstas en la Ley 48 de 1983,

DECRETA:

Artículo 1o. **Finalidad.** Los sistemas reglamentados por este Decreto se denominan "Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación", los cuales estarán destinados exclusivamente a financiar la estabilización de los precios de exportación de los productos básicos de origen agropecuario y los derivados de ellos que determine el Gobierno, con el propósito de atenuar las fluctuaciones de los precios internacionales, asegurando así la regularidad e incremento de los volúmenes de exportación. Tales Fondos serán cuentas corrientes separadas en el Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo, y administradas por éste para cada producto.

Parágrafo. El ordenador de gastos de cada Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación será el funcionario que designe Proexpo para tal efecto.

Artículo 2o. **Productos beneficiados.** Con el objeto de armonizar la evolución de los precios con el volumen de exportación y la capacidad de producción nacional, el Gobierno, por intermedio del Ministro de Agricultura, determinará los productos exportables de origen agropecuario beneficiados con los Fondos reglamentados en este Decreto.

Artículo 3o. **Recursos.** Los recursos de cada Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación, provendrán de las siguientes fuentes:

1o. Las partidas destinadas por el Gobierno Nacional y por Proexpo para apoyar el cumplimiento de los objetivos contemplados en este Decreto.

2o. Los recursos que se aprueben para el financiamiento de programas de apoyo a las exportaciones y estabilización de precios, provenientes de los Fondos de Fomento creados por la Ley para promover la producción agrícola.

3o. Las sumas que los exportadores autoricen retener de los reintegros de divisas por concepto de los productos amparados por el Fondo y que se exporten, de acuerdo a los Convenios de Estabilización que se celebren de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o. del presente Decreto.

4o. Los recursos provenientes de los aportes de Entidades Públicas o de otras personas naturales o jurídicas vinculadas al fomento del sector agropecuario, de acuerdo con los Convenios que se celebren al respecto.

5o. Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los recursos del Fondo en títulos valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos por el Banco de la República.

Artículo 4o. Comité Directivo de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación. Los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación tendrán un Comité Directivo que estará integrado por:

- 1o. El Ministro de Agricultura, o su delegado, quien lo presidirá.
- 2o. El Ministro de Desarrollo Económico, o su delegado.
- 3o. El Director de PROEXPO, o su delegado.
- 4o. El Gerente General del IDEMA, o su delegado.
- 5o. El Gerente General del ICA, o su delegado.
- 6o. Un representante de los Productores.
- 7o. Un representante de los Exportadores.

Parágrafo. Corresponde al Ministro de Agricultura designar los representantes de los Productores y de los Exportadores, para períodos de dos (2) años, con base en las ternas remitidas por las agremiaciones representativas de cada producto, los cuales integrarán el Comité Directivo de aquellos Fondos cuyo funcionamiento se autorice, conforme a lo establecido en el artículo 10 del presente Decreto.

Artículo 5o. Funciones del Comité Directivo de los Fondos. El Comité Directivo de los Fondos tendrá las siguientes funciones:

- 1a. Conceptuar sobre la metodología de cálculo de los precios internacionales de referencia de que trata el artículo 7o. del presente Decreto, correspondiente a los productos amparados por los Fondos.
- 2a. Conceptuar sobre el porcentaje de compensación al exportador o de cesión autorizada a favor de los Fondos, a que se refiere el artículo 7o. de este Decreto.
- 3a. Presentar propuestas al Gobierno para reglamentar las operaciones de estabilización y compensación temporal efectuadas a través de los Fondos.
- 4a. Formular propuestas para la consecución de recursos, en aras de lograr una permanente operación de los Fondos.
- 5a. Conceptuar sobre el alcance y los términos de los Convenios de Estabilización de que trata el artículo 8o. del presente Decreto, los derechos y obligaciones recíprocos de las partes, así como las sanciones e indemnizaciones a que su incumplimiento diere lugar.
- 6a. Sugerir al Gobierno y a las entidades públicas las medidas administrativas necesarias para el control de la subfacturación de exportaciones.

7a. Aprobar las políticas para un manejo eficiente del presupuesto anual de los Fondos, sus gastos de operación y administración, las inversiones temporales de sus recursos financieros y otros egresos que están directamente relacionados con el objetivo de estabilización de los precios de exportación.

8a. Evaluar las actividades de los Fondos y formular las recomendaciones a que hubiere lugar.

9a. Aprobar los estudios técnicos necesarios para sustentar la incorporación de los derivados de los productos básicos al sistema, especificando sus calidades y variedades.

10. Definir los procedimientos pertinentes para efectos de la cancelación de las obligaciones que demanden los gastos operativos de las Secretarías Técnicas de cada Fondo, a las cuales hace referencia el artículo siguiente:

Artículo 6o. Secretarías Técnicas de los Fondos. Cada Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación tendrá un Secretario Técnico que será designado por el Comité Directivo y cuyos servicios se pagarán por Proexpo con cargo a los recursos de cada Fondo. Las Secretarías Técnicas de los Fondos funcionarán en el Ministerio de Agricultura bajo la coordinación de la Dirección General de Comercialización.

Parágrafo 1o. Mientras comienza a regir la nueva estructura administrativa del Ministerio de Agricultura establecida en el Decreto extraordinario número 501 de 1989, las Secretarías Técnicas de los Fondos funcionarán bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario, "OPSA".

Parágrafo 2o. El Secretario Técnico de cada Fondo deberá actuar siguiendo las directrices trazadas por el Comité Directivo establecido en el artículo 4o. del presente Decreto.

Parágrafo 3o. Las Secretarías Técnicas de los Fondos se integrarán con personal de alta calificación profesional, quien en forma permanente elaborará los estudios, propuestas y evaluaciones técnicas requeridas para el funcionamiento y eficiencia administrativa del Fondo.

Artículo 7o. Procedimientos de las operaciones de estabilización para exportaciones.

1o. Si el precio real de exportación estuviere por debajo del precio de referencia, el Fondo compensará a los exportadores en el equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos precios.

2o. Si el precio real de exportación fuere superior al precio de referencia, el exportador cederá al Fondo, de acuerdo con el Convenio que se celebre sobre el particular, un porcentaje de la diferencia entre ambos precios.

Parágrafo 1o. Se entenderá por precio real de exportación el valor FOB unitario de la misma que se consigne en el

respectivo Documento Unico de Exportación debidamente tramitado.

Parágrafo 2o. El ordenador de gastos designado por Proexpo y el Secretario Técnico de cada Fondo establecerán la metodología de cálculo del precio de referencia, a partir de la cotización más representativa en el mercado internacional para cada producto colombiano, con base en un promedio móvil no inferior a los últimos doce (12) meses, ni superior a los sesenta (60) meses anteriores.

Parágrafo 3o. Corresponde también al ordenador de gastos designado por Proexpo y al Secretario Técnico de cada Fondo establecer la metodología para la fijación del precio real de exportación mínimo aceptable, para efectos de la liquidación señalada en los numerales primero y segundo del presente artículo.

Parágrafo 4o. El porcentaje de la diferencia entre ambos precios, que se cederá a los Fondos o se compensará a los exportadores, según sea el caso, será establecido por el Comité Directivo de los Fondos, teniendo en cuenta las recomendaciones presentadas por el Secretario Técnico de cada uno de ellos, dentro de un margen máximo o mínimo que oscile entre el 85% y 50%, para el respectivo producto.

Artículo 8o. Convenios de estabilización. Los exportadores de los productos beneficiados deberán suscribir con Proexpo "Convenios de Estabilización", que permitan el funcionamiento de cada Fondo. Dichos Convenios contendrán, además de las cláusulas que sugiera el Comité Directivo, las relativas a los siguientes aspectos:

- 1o. Mecanismo para la entrega de las compensaciones al exportador.
- 2o. Autorización de los exportadores al Banco de la República para retener de los reintegros de divisas y abonar a favor del Fondo el porcentaje cuya cesión le corresponde al exportador.
- 3o. Reglas y procedimientos para hacer efectivas las operaciones de estabilización y compensación previstas en este Despacho.

Parágrafo 1o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, "Incomex", exigirá, previa la expedición del registro de exportación de los productos agropecuarios beneficiados con los sistemas reglamentados por el presente Decreto, una certificación del Ministerio de Agricultura de que el respectivo exportador ha suscrito los correspondientes convenios de estabilización. Estas certificaciones tendrán una validez por el período que el Ministerio de Agricultura determine.

Parágrafo 2o. Según las directrices trazadas por el Comité Directivo de los Fondos, Proexpo podrá disponer la suscripción de convenios o contratos, y expedir los actos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del presente Decreto.

Artículo 9o. Registro de transacciones. La celebración de convenios de libertad de exportación que contemplen productos beneficiados por los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación, requerirán el visto bueno, previo del Ministerio de Agricultura.

Artículo 10. Excedentes o utilidades. Cuando al final de un ejercicio contable, los Fondos presenten excedentes o utilidades, éstos se deberán dedicar exclusivamente a incrementar los recursos del mismo Fondo, con el propósito de garantizar su funcionamiento permanente.

Parágrafo. Por estar estos Fondos sostenidos principalmente con recursos provenientes de los exportadores, que no constituyen impuestos ni contribuciones, las inversiones de los particulares en cada uno de ellos, así como sus rendimientos, no estarán sujetos al Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

En cuanto a los recursos provenientes del Presupuesto Nacional, tanto en su inversión como en los trámites relacionados con su manejo, se aplicarán en un todo los preceptos del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y demás normas que lo complementan.

Artículo 11. Funcionamiento de fondos por producto. Los Ministerios de Desarrollo Económico y Agricultura, autorizarán conjuntamente, mediante resolución motivada, el funcionamiento de Fondos de Estabilización de Precios de Exportación para cada producto que se estime pertinente.

La reglamentación que se expide para cada Fondo cuyo funcionamiento se autorice, se regirá estrictamente por los parámetros establecidos en el presente Decreto.

Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4o. del presente Decreto, corresponde al Ministro de Agricultura, designar los representantes de los productores y de los exportadores en el Comité Directivo de cada Fondo de Estabilización de Precios de Exportación, cuyo funcionamiento se autorice, para períodos de dos (2) años, con base en las ternas remitidas por las agremiaciones representativas del producto.

Artículo 12. Disposiciones generales. Proexpo, con base en las directrices del Comité Directivo, dictará las medidas administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de este Decreto.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 13 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Agricultura

Gabriel Rosas Vega

El Ministro de Desarrollo Económico,

Carlos Arturo Marulanda Ramírez.

Supresión del impuesto de patrimonio

DECRETO NUMERO 1321 DE 1989
(junio 20)

por el cual se modifica el impuesto de patrimonio.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades consagradas en el artículo 11 de la Ley 84 de 1988, hoy artículo 298 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:

1o. Que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 14 de 1983 se está adelantando el proceso de actualización y formación catastral de los predios, lo cual implica un incremento en las bases gravables del impuesto de patrimonio.

2o. Que de conformidad con el Decreto extraordinario 2687 de 1988, hoy Título V del Libro I del Estatuto Tributario, a partir del año gravable de 1992 se adopta el ajuste integral por inflación a los estados financieros, lo cual implica una actualización de los valores patrimoniales, con incidencia en la determinación del impuesto de renta, incluida la renta presuntiva sobre el patrimonio.

3o. Que la Ley 84 de 1988 facultó al Presidente de la República para eliminar el impuesto de patrimonio, o reducir sus tarifas, motivando dichas facultades en la necesidad de armonizar la carga tributaria de los contribuyentes, teniendo en cuenta los puntos mencionados en los considerandos anteriores.

4o. Que es necesario mantener actualizado el Estatuto Tributario,

DECRETA:

Artículo 1o. Adiciónase el artículo 297 del Estatuto Tributario contenido en el Decreto 624 de 1989, con el siguiente inciso 1o:

"A partir del año gravable de 1989, elimínase el impuesto de patrimonio sobre los primeros diez millones de pesos (\$ 10.000.000) del valor patrimonial neto, que correspondan a la casa o apartamento de habitación del contribuyente".

Artículo 2o. Adiciónase el artículo 294 del Estatuto Tributario contenido en el Decreto 624 de 1989, con el siguiente inciso:

"A partir del año gravable en que entren en aplicación los ajustes integrales por inflación a los estados financieros, a que se refieren los Capítulos II y V del Título V del Libro I del Estatuto Tributario, elimínase para todos los contribuyentes, el impuesto de patrimonio".

Artículo 3o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 20 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcón Mantilla.

Régimen de las precooperativas

DECRETO NUMERO 1333 DE 1989
(junio 21)

por el cual se establece el régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 128 de la Ley 79 de 1988,

DECRETA:

TITULO I

Del Régimen de constitución y reconocimiento

CAPITULO I

Objetivos, constitución y reconocimiento

Artículo 1o. **Objetivos.** Para el cumplimiento de sus propósitos y teniendo en cuenta su característica de transitoriedad como empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, las precooperativas se organizarán y funcionarán dando aplicación a los siguientes objetivos generales:

1o. Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco comunitario y sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y aplicación de la ideología cooperativa.

2o. Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución o uso de los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de propiedad cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social.

3o. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para los asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y consciente.

4o. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus aspectos económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección social.

Artículo 2o. Constitución. Conforme a los términos del acuerdo cooperativo, la constitución de toda precooperativa se hará por un mínimo de cinco (5) asociados fundadores, en reunión en la cual se aprobarán los estatutos que hayan de regirla, se evaluarán los aportes en trabajo o en especie si fuere el caso, y se levantará y firmará por los constituyentes el acta de fundación especificando sus nombres, documentos de identificación y el monto del aporte inicial de cada uno, sea en dinero, en trabajo o en especie.

En el mismo acto de constitución serán elegidos en propiedad los miembros de los órganos de administración y vigilancia, según lo previsto por los estatutos aprobados.

El comité de administración allí designado nombrará el representante legal de la entidad, quien será el responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica.

Artículo 3o. Reconocimiento. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas reconocerá personería jurídica a la precooperativa que acredite los requisitos del artículo anterior y allegue los siguientes documentos en original y copia:

- 1o. Solicitud de reconocimiento debidamente suscrita por el representante legal.
- 2o. Acta de fundación.
- 3o. Estatutos aprobados.
- 4o. Constancia de pago del capital inicial suscrito.
- 5o. Constancia de capacitación precooperativa impartida a los asociados fundadores, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas.
- 6o. Constancia de compromiso de la entidad promotora, salvo cuando la constitución de la precooperativa corresponda a programas de promoción y fomento adelantados por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60) días siguientes

al recibo de la solicitud. Si no lo hiciera dentro del término previsto, operará el silencio administrativo positivo y la precooperativa podrá iniciar actividades.

El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, adelantará el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 4o. Registro. En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la precooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de su representante legal debidamente identificado, y se autorizará su funcionamiento.

CAPITULO II

De las entidades promotoras

Artículo 5o. Entidad promotora. Entiéndese por entidad promotora la persona jurídica pública o privada, que con el propósito de propiciar la asociación de personas en la forma de precooperativas y de apoyar el proceso evolutivo de éstas hacia entidades cooperativas, desarrolla actividades de promoción, orientación y asistencia técnica, administrativa o financiera, teniendo en cuenta las necesidades del grupo de su acción.

Estas acciones se realizarán siempre en provecho de la precooperativa y sin pretender beneficio lucrativo para la entidad promotora.

Artículo 6o. Modalidades de promoción y apoyo. Los términos y modalidades del apoyo que se comprometa a prestar la entidad promotora, sea pública o privada, se harán constar por escrito. Igualmente, las obligaciones que en virtud de aquél adquiere la precooperativa. Si la entidad promotora y la precooperativa acuerdan la participación de aquélla en la administración o vigilancia de esta última, tal participación será establecida en los estatutos de la precooperativa, previniendo su disminución gradual necesaria para el ejercicio de los derechos de los asociados. La participación de la entidad promotora en los órganos de administración y vigilancia de la precooperativa en ningún caso puede ser mayoritaria respecto de la participación de los asociados.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas establecerá los reglamentos conforme a los cuales las entidades promotoras orientarán la organización de las precooperativas y prestarán la asistencia técnica, administrativa o financiera, requerida para la evolución de estas a cooperativas.

Artículo 7o. Asociación de las entidades promotoras. La entidad promotora que carezca de ánimo de lucro podrá asociarse a las precooperativas que promueva y apoye. De igual manera podrán ser asociados de las precooperativas las personas previstas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988.

TITULO II

Del funcionamiento interno de las precooperativas

CAPITULO I

De la administración y vigilancia

Artículo 8o. **Organos de administración.** La administración de las precooperativas será ejercida por los siguientes órganos:

- Junta de asociados
- Comité de administración, y
- Director ejecutivo

Artículo 9o. **Junta de asociados.** La junta de asociados es el órgano máximo de administración de las precooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. Sus funciones serán las previstas en los estatutos en concordancia con las establecidas para las asambleas generales de las cooperativas, y las especiales establecidas en este Decreto y demás normas legales.

Parágrafo 1o. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos.

Parágrafo 2o. Cuando estatutariamente se establezca que la Junta de Asociados pueda ser sustituida por Junta de Delegados, serán aplicables en lo pertinente las disposiciones que señala la Ley para las Entidades Cooperativas.

Artículo 10. **Comité de Administración.** El Comité de Administración es el órgano permanente de administración, subordinado a las directrices y políticas de la junta de asociados.

El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones serán fijados en los estatutos.

Las atribuciones del comité de administración serán las necesarias para la realización del objeto social. Se considerarán atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la Ley o por los estatutos.

En las precooperativas cuyo número de asociados no sea superior a diez (10) la junta de asociados podrá hacer las veces de Comité de Administración.

Artículo 11. **Director Ejecutivo.** El Director Ejecutivo será el representante legal de la precooperativa y el ejecutor de las decisiones de la junta de asociados y del comité de administración. Será nombrado por éste y sus funciones serán precisadas en los estatutos.

Parágrafo. Las precooperativas podrán establecer en sus estatutos que el presidente del comité de administración tenga el carácter de director ejecutivo y ejerza sus funciones.

Artículo 12. **Organos de vigilancia.** Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre la precooperativa, ésta contará con un comité de vigilancia y un revisor fiscal, quien deberá ser contador público con matrícula vigente.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a las precooperativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas o de situación geográfica o el número de asociados lo justifiquen.

Las precooperativas que tengan un número de asociados no superior a veinte (20) podrán establecer en sus estatutos y reglamentos otras formas para el ejercicio del control social.

Las funciones del comité de vigilancia y del revisor fiscal serán establecidas en los estatutos, observando lo dispuesto para las juntas de vigilancia y el revisor fiscal de las cooperativas.

Artículo 13. **Quórum y mayorías.** En los estatutos de las precooperativas cuyo número de asociados no sea superior a diez (10), las disposiciones de la legislación Cooperativa sobre quórum y mayorías se ajustarán a los requerimientos que impone dicho número sin perjuicio de los principios sobre participación democrática de los asociados.

Artículo 14. **Otros comités.** Las precooperativas podrán crear los comités especiales para el adecuado cumplimiento de su objeto social.

En todo caso se proveerá la integración, funcionamiento y atribuciones de un Comité de Educación o a la asignación de estas atribuciones a uno de los asociados o a un órgano de la precooperativa, cuando el número de asociados no permita la conformación de aquél.

CAPITULO II

Del régimen económico

Artículo 15. **Patrimonio.** El patrimonio de las precooperativas estará constituido por los aportes sociales, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.

Artículo 16. **Límite de aportes.** Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los aportes sociales de la precooperativa y ninguna persona jurídica más del 40% de los mismos.

En los estatutos de la precooperativa para los casos en los cuales la Entidad promotora sea asociada, deberán contemplarse los mecanismos para disminuir gradualmente su participación porcentual en los aportes sociales.

Artículo 17. **Revalorización de aportes.** Las precooperativas podrán establecer en los estatutos un procedimiento para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales dentro de los límites que fije el reglamento de la Ley para cooperativas y sólo para ejercicios económicos posteriores a la iniciación de su vigencia.

Artículo 18. **Aplicación de excedentes.** Si del ejercicio anual resultaren excedentes, éstos se destinarán, en primer término, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y si no las hubiere, se aplicarán de la siguiente forma: Un diez por ciento, como mínimo, para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales y un veinte por ciento, como mínimo, para el fondo de educación.

El remanente podrá aplicarse, en todo o en parte, según lo determinen los estatutos o la junta de asociados, así:

- 1o. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
- 2o. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
- 3o. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo. En este caso, un cuarenta por ciento, como mínimo, deberá ser acreditado a los aportes sociales individuales, con el objeto de fortalecer la precooperativa.

Artículo 19. **Otras reservas y fondos.** Las precooperativas podrán crear por decisión de la Junta de Asociados otras reservas y fondos con fines determinados.

CAPITULO III

De la conversión

Artículo 20. **Acto de conversión.** El acto de conversión de una precooperativa en cooperativa requiere de la decisión adoptada por la junta de asociados con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados; en la misma reunión se aprobarán los nuevos estatutos, se elegirán en propiedad los organismos de administración y vigilancia y se aprobarán los estados financieros del ejercicio que se liquida.

Artículo 21. **Aprobación de la conversión.** El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas aprobará la conversión de precooperativa a cooperativa con base en los siguientes requisitos:

- 1o. Memorial petitorio.
- 2o. Acta de la junta de asociados.
- 3o. Texto completo de los estatutos aprobados y
- 4o. Copia de los estados financieros.

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenará el registro establecido en el artículo 17 de la Ley 79 de 1988 en el acto de aprobación de la conversión.

Artículo 22. **Continuidad de derechos y obligaciones.** La Cooperativa continuará ejerciendo los derechos y cumpliendo con las obligaciones de la precooperativa que le dio origen, sin solución de continuidad.

TITULO III

Disposiciones finales

Artículo 23. **Promoción y fomento.** Preferencialmente el desarrollo y fomento de las precooperativas estará a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, de los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, de las instituciones auxiliares del cooperativismo y de otras entidades que tengan previsto este propósito en su objeto social.

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas adoptará las medidas necesarias para apoyar la promoción de las precooperativas, con el propósito de asegurar el impulso de estas empresas asociativas. De igual manera expedirá las reglamentaciones que estime convenientes para lograr dicho objetivo.

Artículo 24. **Beneficios.** Las precooperativas gozarán de las prerrogativas y exenciones establecidas o que establezcan en la Ley para las cooperativas.

Artículo 25. **Inspección y vigilancia.** Las precooperativas estarán sujetas a la inspección y vigilancia permanente del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en los términos de la Ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias.

Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de congestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de la precooperativa.

El Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones para establecer los procedimientos simplificados de liquidación de las precooperativas cuando éstas o el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decidan su liquidación.

Artículo 26. **Funcionamiento y operaciones.** El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas expedirá las providencias necesarias para orientar el adecuado funcionamiento de las precooperativas y el desarrollo de sus operaciones, teniendo en cuenta el objeto social de éstas y las características particulares de orden económico y administrativo que presenten tales organizaciones.

En ningún caso podrán constituirse precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con el objeto de realizar actividades que la ley prohíba para esta clase de empresas asociativas.

Por lo tanto, las precooperativas no podrán ejercer dicha actividad ni realizar captaciones del público en forma

masiva y habitual. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas contará con las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario para el caso de que una precooperativa ejerza ilegalmente la actividad financiera o realice captación masiva y habitual.

Artículo 27. Sanciones. Las precooperativas, los miembros de los órganos de administración y vigilancia, los empleados y los liquidadores de estas entidades podrán ser sancionados en los términos, por las causales y según los procedimientos establecidos por la ley para las cooperativas.

Las entidades promotoras que utilicen a las precooperativas para obtener beneficio lucrativo en provecho de aquéllas, serán sancionadas con multas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en las cuantías que el mismo Departamento fije sin exceder el doble del valor del beneficio indebidamente obtenido.

Artículo 28. Disposiciones aplicables. Los aspectos relacionados con la constitución, organización y funcionamiento de las precooperativas no regulados en el presente Decreto, ni previstos en los estatutos de aquéllas, conforme a lo establecido en éste, se sujetarán a la Ley 79 de 1988.

De acuerdo con su objeto social, también se someterán a las normas que les sean aplicables a los tipos de cooperativas en las que posteriormente se organicen.

Artículo 29. En un plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de la vigencia de este Decreto, las precooperativas constituidas con anterioridad a ésta, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Hasta la fecha de la sanción por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas de las reformas estatutarias adoptadas y presentadas para el efecto dentro del plazo establecido, las precooperativas se registrarán conforme a sus estatutos.

Artículo 30. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 21 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro,
Luis Bernardo Flórez Enciso.

El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas,

Barlaham Henao Hoyos.

Bonos de financiamiento especial

DECRETO NUMERO 1367 DE 1989
(junio 26)

por el cual se ordena la emisión de títulos de deuda pública interna denominados "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989" y se fijan las características y los términos para su suscripción.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los artículos 16, y 31 a 38 de la Ley 43 de 1987,

DECRETA:

Artículo 1o. Ordénase la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de títulos de deuda pública interna denominados "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", en cuantía hasta de diez mil millones de pesos (\$ 10.000.000.000.00) moneda legal, destinados a la inversión forzosa que deben efectuar los contribuyentes señalados en los artículos 34 y 35 de la Ley 43 de 1987.

Artículo 2o. Los "Bonos de Financiamiento Especial Emisión 1989", tendrán las siguientes características:

- a) Serán títulos a la orden, denominados en moneda nacional;
- b) Se emitirán con plazo de vencimiento de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su primera colocación;
- c) A su vencimiento se amortizarán por el ciento treinta por ciento (130%) de su valor nominal y sólo podrán ser utilizados para el pago de impuestos nacionales;
- d) Serán libremente negociables en el mercado de valores;
- e) Estarán exentos de todo tipo de impuestos mientras permanezcan en poder del adquirente primario;
- f) El valor nominal de los bonos no será inferior a cinco mil pesos (\$ 5.000.00) y se expedirán en múltiplos de un mil pesos (\$ 1.000.00), para lo cual se aproximará al múltiplo de un mil pesos inferior más cercano;
- g) Los bonos podrán fraccionarse en múltiplos de un mil pesos (\$ 1.000.00), sin que la fracción sea inferior a cinco mil pesos (\$ 5.000.00) o al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal del título original, y
- h) Serán expedidos y redimidos por el Banco Popular.

Artículo 3o. De conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley 43 de 1987, están obligados a suscribir los "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", los siguientes contribuyentes:

1. Las personas jurídicas y sociedades de hecho, nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, en una suma equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto de renta y complementarios a cargo del contribuyente por el año gravable de 1988.

2. Las personas naturales residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, y hayan obtenido una renta líquida gravable superior a cuatro millones de pesos (\$ 4.000.000.00) moneda legal en el año gravable de 1986, en una suma equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto de renta y complementarios a cargo del contribuyente por el año gravable de 1987.

Artículo 4o. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 3o. de este Decreto, deberán suscribir los "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", en cualesquiera de las oficinas del Banco Popular, correspondientes a la jurisdicción de la Administración de Impuestos Nacionales donde el contribuyente haya debido o deba presentar su declaración de impuesto a la renta y complementarios por el año gravable de 1988.

El plazo para suscribir y cancelar la inversión en los bonos vence en las fechas que se indican a continuación:

Grupo 1. Personas jurídicas y sociedades de hecho, nacionales: atendiendo al último dígito del NIT del declarante, así:

Si el último dígito del NIT es:	Hasta el día
1 — 2	16 de agosto
3 — 4	18 de agosto
5 — 6	23 de agosto
7 — 8	25 de agosto
9 — 0	29 de agosto

Grupo 2. Personas naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas atendiendo el último dígito de la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o NIT del declarante, así:

Si el último dígito es:	Hasta el día
1 — 2	1 de septiembre
3 — 4	4 de septiembre
5 — 6	5 de septiembre
7 — 8	6 de septiembre
9 — 0	7 de septiembre

Artículo 5o. La suscripción extemporánea de los "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", acarreará el pago de intereses moratorios, a la tasa establecida para el impuesto sobre la renta, más el pago de una sanción por

extemporaneidad equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la inversión, liquidada por mes o fracción de mes de atraso en la suscripción, sin que exceda del cincuenta por ciento (50%) del valor a invertir.

Artículo 6o. Una vez editados y emitidos los títulos a que se refiere este Decreto, la Tesorería General de la República elaborará el acta de entrega de ellos al Banco Popular en los términos y condiciones que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aquél procederá a colocarlos de conformidad con las disposiciones de este Decreto y las estipulaciones del respectivo contrato de administración fiduciaria.

Parágrafo. En el momento de efectuarse la inversión por parte del contribuyente, el Banco Popular podrá expedir un "Recibo de Inversión Provisional", con base en el cual en un término no mayor de cuatro meses entregará los títulos definitivos.

Artículo 7o. Los "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", podrán servir para la apertura de créditos suplementales y extraordinarios al presupuesto nacional, y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 43 de 1987, su producto se destinará a gastos generales y de inversión de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Ministerio Público y la Rama Jurisdiccional, según la distribución que apruebe el Consejo de Ministros.

Artículo 8o. El Gobierno Nacional.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público— de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 43 de 1987, celebrará con el Banco Popular el contrato de administración fiduciaria de los títulos. Entre otros aspectos, se estipulará la forma y términos de traslado de los recursos de las colocaciones de los bonos a la Tesorería General de la República, la remuneración por el manejo fiduciario, la clase de información que el agente fiduciario deberá suministrarle a las Direcciones Generales de Impuestos Nacionales y Crédito Público, al Centro de Información y Sistemas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contraloría General de la República, así como la forma y oportunidad de su entrega.

Artículo 9o. El Gobierno Nacional efectuará las apropiaciones presupuestales que se requieran para atender los gastos que demande la agencia fiduciaria, de los "Bonos de Financiamiento Especial, Emisión 1989", los que podrá cubrir con recursos de las colocaciones primarias, en la forma que se estipule en el contrato de administración fiduciaria.

Artículo 10. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 26 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcón Mantilla.

Conservación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico

DECRETO NUMERO 1397 DE 1989
(junio 27)

por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959

El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3o.
del artículo 120 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 163 de 1959 contiene disposiciones encaminadas a la debida protección, defensa y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico colombiano;

Que es importante establecer las reglas para que las autoridades competentes puedan ejercer las funciones encaminadas al logro de estos objetivos;

Que así mismo se hace necesario reglamentar otros aspectos de la misma Ley, que la hagan operante y permitan la cumplida ejecución de los mandatos contenidos en la misma,

DECRETA:

Artículo 1o. Los monumentos muebles a que se refiere la Ley 163 de 1959, no están cobijados por la noción de tesoros prevista en el artículo 700 del Código Civil.

En consecuencia, a ellos no se aplican los artículos 701 a 709 y 712 del Código Civil, ni las normas que los subrogan.

Artículo 2o. Los monumentos que pertenezcan legítimamente al dominio particular, podrán ser adquiridos por la Nación o expropiados mediante el cumplimiento de los requisitos legales y previo el pago de la indemnización correspondiente.

Los demás pertenecen a la Nación, por integrar el patrimonio histórico y artístico nacional.

Artículo 3o. En desarrollo del artículo 15 de la Ley 163 de 1959, el Gobierno puede contratar o convenir con particulares la realización de exploraciones y excavaciones que tengan por objeto la búsqueda de monumentos.

En tal caso, si son monumentos muebles, puede pactarse que la remuneración del particular corresponda a una porción de los bienes rescatados o de su valor. Para el caso

de los monumentos inmuebles, tal remuneración se fijará en un porcentaje de su valor.

Los contratos y convenios a que alude este artículo son de derecho privado de la administración y se regirán exclusivamente por las normas de la Ley 163 de 1959.

Artículo 4o. Para iniciar las labores de exploración y excavación concernientes a la búsqueda de monumentos, el Gobierno Nacional citará al Consejo de Monumentos Nacionales con el fin de que lo asesore en la designación de expertos en la materia y para dar cumplimiento a los fines previstos en el artículo 15 de la Ley 163 de 1959.

Artículo 5o. Para la valoración de los monumentos, el Gobierno acudirá al dictamen de expertos nacionales o extranjeros, preferencialmente el de entidades de reconocida reputación científica o artística.

Artículo 6o. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional llevar el registro de los monumentos nacionales muebles e inmuebles, establecido en el artículo 16 de la Ley 163 de 1959, así como certificar sobre la existencia o inexistencia de dicho registro respecto de bienes determinados.

La falta de registro de monumentos muebles podrá ser considerada por la autoridad aduanera como una conducta encaminada a sacarlos ilegalmente del país.

Artículo 7o. Con el fin de impedir que se lleve a cabo la exportación ilegal de monumentos muebles nacionales a los que se refieren las Leyes 14 de 1936 y 163 de 1959, las autoridades aduaneras podrán efectuar el decomiso de los mismos.

Artículo 8o. Para los efectos de este Decreto, entiéndese por decomiso la retención precautelada y temporal de los objetos que revistan la categoría de monumentos muebles.

El decomiso precautelado no implica menoscabo del derecho de propiedad sobre los monumentos muebles que se hallen legítimamente en el dominio particular, pero sí produce la limitación temporal de la tenencia de los mismos, mediante su depósito en un lugar que ofrezca las mayores seguridades o la designación de un secuestro que podrá ser una entidad bancaria o un museo de conocida reputación, a criterio de la autoridad que lo realice.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del artículo 314 del Decreto 2666 de 1984 y las demás normas que lo modifiquen, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 9o. El decomiso precautelado se practicará cuando se tema fundadamente que va a llevarse a cabo una futura exportación ilegal de bienes que tengan el carácter de monumentos muebles. En este caso, el decomiso se efectuará mediante orden escrita del Director General de Aduanas, quien sólo puede impartirla previa apreciación de los medios de prueba previstos en las Leyes, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Artículo 10. Para practicar el decomiso precautelar, las autoridades aduaneras, con la autorización escrita del Director General de Aduanas, podrán requisar, en cualquier lugar, equipajes y personas, exigir la apertura de archivos, baúles, cajas y toda clase de recipientes, ordenar la inmovilización de vehículos mientras se llevan a cabo las labores de búsqueda y, en general, utilizar todos los medios de policía que permitan su eficaz realización.

El funcionario competente levantará un acta que permita la identificación de los bienes y tomará copia de los documentos decomisados, si los bienes encontrados pertenecen a la categoría de monumentos nacionales.

Artículo 11. Cuando se trate de monumentos muebles formados por un conjunto de bienes tales como joyas, piedras preciosas, monedas o documentos, cuyo valor histórico o artístico se derive de circunstancias conexas, el hecho de que parte de ellos pudiera haber sido sacada ilegalmente del país constituye motivo suficiente para ordenar el decomiso precautelar de los bienes restantes.

Artículo 12. El decomiso precautelar cesará cuando se produzca el registro de los bienes ante el Ministerio de Educación Nacional, seguido, si es del caso, de la autorización de exportación en los términos previstos en el artículo 9o. de la Ley 163 de 1959. Mientras se lleva a cabo lo anterior, el tenedor podrá hacer cesar el decomiso precautelar ofreciendo garantía de que el monumento mueble permanecerá en el país, la cual será calificada por el Director General de Aduanas.

Parágrafo 1o. Las garantías previstas en este artículo pueden consistir en caución, depósito u otra clase de medida de aseguramiento.

Parágrafo 2o. Para efectuar el registro bastará la solicitud que en tal sentido formule el Director General de Aduanas acompañada de una descripción competente de los bienes.

Artículo 13. El Alcalde, Corregidor o Inspector de Policía ante quien se dé el aviso de hallazgo de un monumento mueble, comunicará también el hecho a las autoridades de aduana para los efectos del presente Decreto.

Artículo 14. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 27 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcón Mantilla

El Ministro de Salud, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Educación Nacional.

Eduardo Díaz Uribe.

RESOLUCIONES

Nuevos Bonos de Vivienda Popular

RESOLUCION NUMERO 45 DE 1989
(Junio 14)

Por la cual se fijan el monto y características de emisión de Nuevos Bonos de Vivienda Popular por parte del Instituto de Crédito Territorial.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el Decreto 3728 de 1982.

RESUELVE:

Artículo 1o. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8o. del Decreto 3728 de 1982, autorizase al Instituto de Crédito Territorial para emitir hasta quince mil millones de pesos (\$ 15.000.000.000) en "Nuevos Bonos de Vivienda Popular".

Artículo 2o. Los "Nuevos Bonos de Vivienda Popular" de que trata el artículo anterior tendrán las siguientes características:

Plazo de vencimiento: 4 años

Amortización: Semestral, a partir del 5o. semestre

Tasa de Interés: 20% anual, pagadera por semestre vencido.

Artículo 3o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

Adición a la Resolución 58 de 1986

RESOLUCION NUMERO 46 DE 1989
(Junio 14)

Por la cual se adiciona la Resolución 58 de 1986 y se deroga una disposición.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el Decreto-Ley 444 de 1967,

RESUELVE:

Artículo 1o. Lo dispuesto en el artículo 1o. de la Resolución 58 de 1986 será aplicable a las solicitudes de licencias de cambio correspondientes al pago de importaciones de bienes contemplados en las posiciones arancelarias 29.34.89.01., 29.34.89.03, 29.31.89.13, 12.03.03.02, 12.03.03.04, 12.03.03.05, 12.03.03.06 y 12.03.03.99.

Artículo 2o. Derógase el artículo 2o. de la Resolución 48 de 1985.

Artículo 3o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

Capital-pasivo del sistema bancario

RESOLUCION NUMERO 47 DE 1989
(Junio 14)

Por la cual se dictan normas en materia de la relación capital-pasivo del sistema bancario.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el Decreto-Ley 2206 de 1963 y la Ley 7a. de 1973,

RESUELVE:

Artículo 1o. A partir del 1o. de julio de 1989, el total de las obligaciones para con el público de un establecimiento bancario no debe exceder de doce punto cinco (12.5) veces su capital pagado y fondo de reserva legal, ambos saneados.

Artículo 2o. Los establecimientos bancarios que a partir de julio 1o. de 1989 lleguen a presentar, durante tres meses calendario consecutivos, excesos en la relación de que trata el artículo anterior, no podrán aumentar el volumen de sus activos por encima del nivel que hayan presentado el último día hábil del respectivo período de incumplimiento.

El límite en el crecimiento de activos establecido en el inciso anterior será aplicable hasta el momento en el cual el respectivo establecimiento demuestre, a satisfacción de la Superintendencia Bancaria, que el total de sus obligaciones para con el público no excede el nivel de que trata el artículo primero de la presente resolución.

No obstante, podrá aumentarse el volumen de activos correspondiente a los préstamos redescontados por el Banco de la República o el Fondo de Promoción de Exportaciones, a los descontados por la Financiera Eléctrica Nacional o el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, a las inversiones voluntarias en títulos de deuda pública o emitidos por el Banco de la República, a las inversiones obligatorias o del encaje, a las disponibilidades en caja, y a los depósitos en el Banco de la República.

Artículo 3o. Los establecimientos bancarios que según balances autorizados a 31 de diciembre de 1988 hubieren presentado un total de obligaciones para con el público superior a 15 veces su capital pagado y fondo de reserva legal, ambos saneados, podrán convenir con la Superintendencia Bancaria un programa de ajuste a la nueva relación de que trata el artículo 1o. con sujeción a las siguientes condiciones:

a) El plazo dentro del cual el banco respectivo deberá ajustarse a la nueva relación. Dentro de ese plazo se fijarán metas trimestrales de ajuste gradual a la relación máxima de 12.5. En todo caso, el plazo total no podrá exceder de 3 años.

b) Metas específicas de utilidades, gastos administrativos, activos improductivos, y de capital y reserva legal, durante y al término del programa.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en el programa, la Superintendencia Bancaria impondrá a los establecimientos bancarios las sanciones correspondientes al incumplimiento de la relación máxima a que se refiere el artículo 1o. de la presente resolución, mientras el banco respectivo persista en el incumplimiento; si el incumplimiento se mantuviere por un período de tres meses consecutivos, la entidad correspondiente quedará sujeta al límite de que trata el artículo 2o. de esta resolución.

Artículo 4. Desde el 1o. de julio de 1989 hasta el 30 de septiembre de 1989, las utilidades no distribuidas de los establecimientos bancarios, correspondientes al primer semestre de 1989, podrán computarse dentro de la base patrimonial requerida para dar cumplimiento a la relación de que trata el artículo 1o. de la presente resolución.

Artículo 5o. Lo dispuesto en la presente resolución se entenderá sin perjuicio de las sanciones que la Superintendencia Bancaria puede imponer respecto del incumplimiento de las relaciones máximas de endeudamiento de que tratan los artículos 1o. de la Resolución 10 de 1975 y 1o. de la Resolución 10 de 1980, vigentes hasta la fecha de entrada en vigor de esta resolución.

Artículo 6o. Deróganse las Resoluciones 10 de 1975, 50 de 1980, 31 de 1981, 21 y 27 de 1989, y el artículo 9o. de la Resolución 10 de 1980. Así mismo, suprímese el límite máximo para la emisión de Certificados de Depósito a Término, contenido en el inciso 1o. de la Resolución 10 de 1980.

Artículo 7o. La presente resolución rige desde el 1o. de julio de 1989.

Modificación a la Resolución 52 de 1987

RESOLUCION NUMERO 48 DE 1989
(Junio 14)

Por la cual se modifica la Resolución 52 de 1987.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 56o. del Decreto-Ley 444 de 1967 y previo concepto del Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,

RESUELVE:

Artículo 1o. El artículo 2o. de la Resolución 52 de 1987 quedará así:

"El precio mínimo de reintegro, en dólares de los Estados Unidos de América, por libra ex-muelle, se calculará así:

a) Se obtendrá el promedio aritmético de los indicadores de la Organización Internacional del Café para el Grupo Otros Arábicas Suaves Promedio Nueva York, Hamburgo/Bremen, 1979, correspondientes a los tres (3) días inmediatamente anteriores a la fecha para la cual se efectúe el cálculo.

b) Se obtendrá el promedio aritmético de los precios de cierre de la primera y segunda posiciones del contrato "C", de la bolsa de café, cacao y azúcar de Nueva York, correspondiente a los tres (3) días inmediatamente anteriores a la fecha para la cual se efectúe el cálculo.

c) Los precios promedios resultantes conforme a los literales a) y b) de este artículo se promediarán entre sí, y a este resultado se le adicionarán siete centavos de dólar. Este valor constituirá el precio mínimo de reintegro por libra ex-muelle para la fecha respectiva".

Parágrafo. Los valores a que se refieren los literales a), b) y c) de este artículo se expresarán en centavos y centésimas de centavo, aproximando cada uno de los promedios a la centésima de centavo más cercana.

Artículo 2o. La presente resolución deroga las Resoluciones 42 de 1989 y rige desde el 15 de junio de 1989. En consecuencia se aplicará a exportaciones de café cuya confirmación de venta se produzca desde dicha fecha.

Corporaciones de Ahorro y Vivienda

RESOLUCION NUMERO 49 DE 1989
(Junio 28)

Por la cual se dictan normas sobre corporaciones de ahorro y vivienda.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el artículo 6o. del Decreto-Ley 2206 de 1963 y la Ley 7a. de 1973,

RESUELVE:

Artículo 1o. El porcentaje contemplado en el literal d) del artículo 1o. de la Resolución 2 de 1989, referente a préstamos que las corporaciones de ahorro y vivienda deben otorgar en desarrollo de los programas urbanos prioritarios a que se refiere el literal e) del artículo 3o. del Decreto 720 de 1987, no será aplicable durante el segundo y tercer trimestre de 1989.

En todo caso, los préstamos referidos serán computables dentro del rango de colocación a que se refiere el literal f) del artículo 1o. de la Resolución 2 de 1989.

Artículo 2o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

INDICE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS

LEY

39 Mayo 9

Diario Oficial 38.809, Mayo 9 de 1989

Aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno de la República de Colombia, suscrito en Lisboa el 28 de mayo de 1988.

DECRETO-LEY

919 Mayo 1

Diario Oficial 38.799 bis

Dicta medidas sobre organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres así: 1. Planeación y aspectos generales; 2. Régimen de las situaciones de desastre: a) Régimen de contratación; b) Ocupación temporal y demolición de inmuebles; c) Imposición de servidumbres y solución de conflictos; d) Adquisición y expropiación, e) Moratoria o refinanciación de deudas; f) Control fiscal; g) Donaciones; 3. Situaciones de calamidad pública; 4. Aspectos institucionales; 5. Fondo Nacional de Calamidades; 6. Codificación de normas: El presente decreto codifica todas las normas vigentes sobre prevención y atención de desastres; 7. Sustitución de normas: los artículos 1 a 23, inclusive, del presente Decreto, sustituyen los artículos 491 a 514 de la Ley 9 de 1979, sobre régimen sanitario.

DECRETOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1086 Mayo 22

Diario Oficial 38.827, Mayo 22 de 1989

Promulga el Acuerdo entre Colombia y la Unesco para el establecimiento de la Sede de la Subcomisión de la COI para el Caribe y Regiones Adyacentes —IOCARIBE—, suscrito en Bogotá el 18 de enero de 1988.

MINISTERIO DE JUSTICIA

1093 Mayo 23

Diario Oficial 38.829, Mayo 23 de 1989

Introduce modificaciones al Decreto 1318 de 1988, por el cual se delegó en los Gobernadores de los Departamentos y en el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, la función de ejercer la inspección y vigilancia sobre las Instituciones de Utilidad Común que no estén sometidas al control de otra entidad.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

938 Mayo 4

Diario Oficial 38.805, mayo 4 de 1989

Dicta medidas sobre fideicomiso de inversión, así: 1. Operaciones de fideicomiso de inversión que realicen los bancos y las corporaciones financieras: contratos de fiducia mercantil; 2. Destinación de los recursos entregados a título de fideicomiso de inversión; 3. Fondos comunes ordinarios y especiales de inversión; 4. Naturaleza de las obligaciones y responsabilidades del fiduciario; 5. De los derechos de los constituyentes o adherentes participantes en fondos comunes de inversión; 6. Prohibiciones a instituciones fiduciarias que administren fondos comunes de inversión; 7. Reglamento de administración del fondo; 8. Gastos a cargo de los fondos; 9. Transición: obligación de bancos, sociedades fiduciarias y corporaciones financieras que estuvieren administrando fondos comunes de inversión en condiciones distintas a las previstas en este decreto.

954 Mayo 4

Diario Oficial 38.806, mayo 5 de 1989

I. Autoriza al ministro de Hacienda y Crédito Público y al Jefe del Departamento Nacional de Planeación para gestionar a nombre del Gobierno

Nacional la contratación de un empréstito externo hasta por la suma de US\$ 925.000.000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas. II. Fija las condiciones financieras del empréstito a que se refiere el punto anterior. III. Determina que los recursos provenientes de este empréstito se destinarán a financiar planes y programas prioritarios del Gobierno Nacional.

964 Mayo 9
Diario Oficial 38.809, mayo 9 de 1989

Prorroga el plazo establecido para la permanencia de las mercancías traídas al recinto ferial con destino a la XVII Feria Internacional de Bogotá y que se encuentran en los terrenos habilitados como Zona Franca Transitoria.

1000 Mayo 10
Diario Oficial 38.811, mayo 10 de 1989

Dicta medidas en materia tributaria, así: 1. Tratamiento de la prima en colocación de acciones; 2. Valor de los dividendos en acciones; 3. Declaración y pago de la retención en la fuente cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias; 4. Ampliación del plazo para entregar algunas informaciones.

1061 Mayo 19
Diario Oficial 38.825, mayo 19 de 1989

I. Autoriza a los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura para gestionar a nombre del Gobierno Nacional un empréstito externo hasta por la suma de US\$ 78.200.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. II. Fija las condiciones financieras del empréstito a que se refiere el punto anterior. III. Determina que los recursos provenientes de este empréstito se destinarán a financiar parcialmente el Programa de Riego en Pequeña Escala que ejecutará el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras —HIMAT—.

1109 Mayo 26
Diario Oficial 38.835, mayo 26 de 1989

I. Ordena una emisión de Títulos de Deuda Pública Externa a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por un valor hasta de US\$ 200.000.000 de los Estados Unidos de América. II. Fija las características y condiciones financieras y de colocación de los Títulos de Deuda Pública Externa a que se refiere el punto anterior.

1111 Mayo 26
Diario Oficial 38.835, mayo 26 de 1989

I. Dicta normas para el ejercicio de las actividades financieras y aseguradoras de las cooperativas. II. Deroga los Decretos 1659 de 1985, 1658 de 1986 y 1876 de 1987.

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

1077 Mayo 22
Diario Oficial 38.827, mayo 22 de 1989

Autoriza la celebración de la Feria Exposición Expocom 89 de Medellín y la creación de una zona Franca Transitoria para tal evento, la cual funcionará dentro del área del Centro de Exposiciones y Convenciones de esta ciudad.

1078 Mayo 22
Diario Oficial 38.827, mayo 22 de 1989

Autoriza dos asesores permanentes para el Consejo Directivo de Comercio Exterior —INCOMEX— y la Junta Directiva del Fondo de Promoción de Exportaciones —PROEXPO—.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

951 Mayo 4
Diario Oficial 38.805, mayo 4 de 1989

Establece el reglamento general para la prestación de los servicios públicos de acueducto y de alcantarillado en todo el territorio nacional.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS

984 Mayo 9
Diario oficial 38.811, Mayo 10 de 1989

Dicta medidas sobre contratación administrativa de las Intendencias y Comisarías.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS

1134 Diario Oficial 38.837, mayo 30 de 1989

I. Dicta medidas para el ejercicio de las actividades de ahorro y crédito y financiera de las cooperativas. II. Deroga los Decretos 2263 de 1984, 1659 de 1985 y 1658 de 1986.

RESOLUCIONES

EJECUTIVA

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0068 Mayo 15
Diario Oficial 38.819, mayo 16 de 1989

I. Autoriza al Banco de la República para contratar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento —BIRF— por la suma de US\$ 80.000.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. II. Señala las características financieras del empréstito a que se refiere el punto anterior. III. Determina que los recursos provenientes de este empréstito se destinarán a financiar parcialmente el Proyecto Quinta Línea de Crédito para la Pequeña y Mediana Industria.

JUNTA MONETARIA

35 Mayo 3

Dicta medidas en materia de giros por concepto de importaciones de bienes de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

36 Mayo 3

I. Introduce modificaciones a la Resolución 31 de 1989 por la cual se autorizó a la Oficina de Cambios del Banco de la República para aprobar licencias de cambio, a los establecimientos de crédito, con cargo al numeral 21 de la balanza cambiaria, con el objeto de que los mismos adquieran divisas en forma transitoria, para aumentar su posición propia en moneda extranjera. II. Deroga el artículo 8 de la Resolución 31 de 1989.

37 Mayo 10

I. Condiciona el otorgamiento de préstamos por parte del Banco de la República al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras al cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1o. de la Resolución 17 de 1987. II. Deroga el artículo 5 de la Resolución 17 de 1989.

38 Mayo 10

I. Autoriza al Banco de la República para vender a los establecimientos de crédito que hayan recibido aportes de capital del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Títulos Canjeables por Certificados de Cambio, los cuales deberán destinarse al

pago de obligaciones externas avaladas o garantizadas por los mismos o al pago de obligaciones externas registrables conforme a lo dispuesto en la Resolución 18 de 1988. II. Fija características a los Títulos Canjeables por Certificados de Cambio a que se refiere el punto anterior. III. Señala las condiciones a las cuales deberá sujetarse el Banco de la República para la venta de los títulos a que se refiere esta resolución. IV. Dispone cómo los establecimientos de crédito cancelarán al Banco de la República los Títulos Canjeables adquiridos. V. Dicta otras disposiciones sobre adquisición, utilización y restitución de los Títulos Canjeables previstos en esta Resolución, al Banco de la República, por los establecimientos de crédito.

39 Mayo 17

Dicta medidas sobre composición de cartera del Banco Popular, al disponer que los créditos que se otorguen a pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores económicos por sumas inferiores a las cuantías máximas de préstamos redescontables con cargo al Fondo Financiero Industrial, serán computables para dar cumplimiento al porcentaje previsto en el literal a) del artículo 1o. de la Resolución 55 de 1986.

40 Mayo 17

I. Autoriza a la Oficina de Cambios del Banco de la República para aprobar licencias de cambio en desarrollo del literal f) del artículo 5 de la Resolución 18 de 1984 sin la constitución de garantías. II. Señala los casos en los cuales la Oficina de Cambios podrá dar cumplimiento a la autorización a que se refiere el punto anterior.

41 Mayo 17

I. Dicta medidas sobre el otorgamiento de créditos por parte de la Caja Agraria, así: 1. Dispone cómo estarán garantizados los préstamos que otorgue la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; 2. Señala las operaciones a las cuales no serán aplicables los límites y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta resolución y el artículo 2o. de la Resolución 30 de 1989. 3. Autoriza a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, para pactar en los préstamos de mediano y largo plazo que otorgue con cargo al Fondo Financiero Agropecuario, una tasa variable revisable por períodos mensuales y fija el requisito que se deberá cumplir para tales efectos. 4. Deroga los artículos 3 y 4 de la Resolución 30 de 1989.

42 Mayo 24

I. Dispone cómo se calculará el precio mínimo de reintegro por exportaciones de café, en dólares de los Estados Unidos de América, a que se refiere la Resolución 52 de 1987. II. Deroga la Resolución 79 de 1988.

43 Mayo 24

I. Dicta medidas sobre encaje de los establecimientos bancarios, así: 1. Fija porcentajes de encaje legal que los establecimientos bancarios deben mantener sobre las exigibilidades en moneda legal señaladas en esta resolución. Para estos efectos define qué se entenderá por entidades del sector público. 2. Señala en 22% el porcentaje de encaje que los establecimientos bancarios, la Caja Colombiana de Ahorros de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la Caja Social de Ahorros deben mantener sobre las exigibilidades correspondientes a Certificados de Depósito de Ahorro a Término. 3. Dispone cómo será el requerido de encaje de los establecimientos bancarios, la Caja Agraria y la Caja Social de Ahorros en las inversiones a que se refiere esta norma por concepto de las exigibilidades anotadas. II. Deroga las Resoluciones 10 de 1988, 7 de 1989 y el artículo 1o. de la Resolución 58 de 1987.

44 Mayo 31

I. Determina que la consignación en moneda legal establecida como requisito para la aprobación de licencias de cambio, para el pago de importaciones a que se refieren las Resoluciones 46 de 1977 y 19 de 1979, deberá efectuarse por el 85% del valor en moneda extranjera de la correspondiente licencia. II. Dispone cómo se constituirá a través de los bancos comerciales la consignación en moneda legal a que se refiere esta resolución. III. Ordena al Banco de la República expedir a favor de los solicitantes de licencias de cambio un documento representativo de moneda extranjera que se denominará "Título de Consignación para la Obtención de Licencias de Cambio". IV. Señala las características de los Títulos de Consignación a que se refiere el punto anterior. V. Establece qué operaciones de giro estarán exentas de la constitución del depósito a que se refiere la presente resolución. VI. Deroga las Resoluciones 46 de 1977, 19 de 1979, 58 de 1984 y 82 de 1984.